

VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín: **La Monarquía doceañista (1810-1837)**, Madrid, Marcial Pons Historia, 2013, 479 págs., ISBN: 978-84-92820-82-5.

Este nuevo libro del profesor Varela se enmarca en la estela del bicentenario de la Constitución de 1812 que ha sido, como no podía ser menos, ocasión de nuevas y fructíferas aportaciones al conocimiento de aquel texto fundacional de nuestro Estado constitucional, bien profundizando en líneas de estudio clásicas o abriendo nuevos enfoques. La presente obra culmina, por ahora, una serie de precisos y esclarecedores estudios que el autor ha venido dedicando, a lo largo de los años, a diversas facetas de nuestro primer constitucionalismo, y en concreto, a partir de la primera edición en 1983 de su libro *La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico. Las Cortes de Cádiz* (Premio «Nicolás Pérez Serrano» del CEC). Una primera obra que, como su autor puntualizó en la «Introducción», se situaba en la estricta Dogmática Constitucional, centrada en el análisis de conceptos básicos de Teoría jurídica del Estado conectados directamente con el problema de la *soberanía* y de la *reforma constitucional*. En dicho estudio se analizaban pormenorizadamente las variadas doctrinas que al respecto se entrecruzaron en los debates de las Cortes de Cádiz por los tres grupos

doctrinales, por él diferenciados, los diputados «realistas», «americanos» y «liberales metropolitanos», enlazando aquéllas con su correspondencia con los textos normativos de la propia Constitución gaditana y la francesa de 1791. Precisamente, la edición del libro objeto de esta reseña ha venido precedida de una nueva edición revisada de aquella primera obra, con el título abreviado de *La teoría del Estado en las Cortes de Cádiz* (edición de CEPC, Madrid 2011).

A partir de aquella obra, el autor fue desgranando sucesivos estudios sobre diversas facetas, influencias y problemas del constitucionalismo *liberal doceañista*, más enmarcados ya en el campo de la Historia Constitucional, de esta disciplina por él mismo definida como a caballo entre el Derecho Público, la Filosofía Política y la Historia. Gran parte de ellos, junto a otros dedicados a épocas posteriores a la gaditana y que nos posibilitan tener un gran fresco sobre nuestra abigarrada historia constitucional, fueron recogidos en una rica y utilísima compilación, *Política y Constitución en España 1808-1978* (CEPC, Madrid 2007), que permite constatar las propias concepciones metodológicas del autor sobre la

forma de hacer Historia Constitucional, conjugando la vertiente normativa e institucional de ésta con su vertiente conceptual y doctrinal, sin perder de vista su conexión mutua y con la realidad política.

Sobre estos sólidos precedentes se presenta este nuevo libro que tenemos entre manos. Esta obra se centra en el estudio de la *forma de gobierno* en el sistema constitucional de 1812. Como es bien sabido, en la vertebración de los sistemas políticos del Estado constitucional en el ciclo fundacional de las revoluciones *liberales* de finales del s. XVIII, principios del XIX, el principio de *división de poderes* fue una pieza maestra en el engranaje del horizonte garantista de los derechos y libertades individuales que caracterizó a las nuevas Constituciones, deudoras de su novedoso concepto *racional-normativo*. En ese horizonte, y en aquella época de ruptura revolucionaria, la reformulación de las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, y más en concreto entre la Jefatura del Estado, el poder gubernativo y el representativo-parlamentario, actores cotidianos del *proceso político*, se convirtió en un problema medular de las nuevas *formas de gobierno* a definir, tanto más en aquellos países, caso de la Francia de 1789-91, como de la España de las Cortes de Cádiz, en que se trató de combinar la persistencia de la institución tradicional de la Monarquía con la refundación de los institutos parlamentarios. Además de que en aquel momento la solución que se diese en el plano de la organización política al ámbito potestativo y relación entre el Rey y estos últimos guardó una íntima conexión con el modelo social a desarticular o plantear, en esa tensión entre la supervivencia de la sociedad estatal del Antiguo Régimen, de cuyos

intereses seguían siendo portavoces los Monarcas, y la vertebración de la nueva sociedad *liberal-clasista*, al calor de la compleja emergencia de la mesocracia, cuyos intereses parecían pasar a ser defendidos prioritariamente por la nueva pujanza del Parlamento. Es en este marco donde cobra todo su interés el estudio de los avatares de la relación Rey-Cortes, que es donde temáticamente se focaliza el presente estudio.

El autor sitúa su estudio en relación con los problemas que suscitaron, en aquella época de las «revoluciones atlánticas», las distintas interpretaciones del principio divisionista a la hora de articular las concretas *formas de gobierno*, en que tanto habían de pesar las diversas influencias doctrinales como las particulares circunstancias socio-políticas de cada caso nacional, y no solo en el momento revolucionario-fundacional, sino en su particular rodaje práctico y efectivo. No en vano, en aquella época se forman, entrecruzan y se distinguen las grandes *formas de gobierno* clásicas en atención a la diversa interpretación y articulación del principio de división de poderes: la *presidencialista*, en la que la opción constitucional norteamericana de 1787 se convertirá en modelo de referencia, la *parlamentaria* de raíz británica, complejamente alumbrada evolutivamente a lo largo del siglo XVIII, y la de *gobierno de Asamblea*, como peculiar interpretación francesa en la primera fase de su Revolución, desde la formación y rodaje de su primera Constitución de 1791 hasta el pleno desarrollo del sistema *convencional* jacobino.

En la presente obra se comienza por sopesar los contrapuestos modelos monárquicos que tuvieron a la vista las Cortes de Cádiz: el modelo británico

que, desde la tantas veces idealizada Monarquía constitucional mixta de la revolución de 1688, había ido ya evolucionando hacia efectivas formas de *parlamentarización*, y el modelo francés de la Constitución de 1791, tan pronto fracasado en el vecino país a raíz de los acontecimientos del verano del 92. Analizándose su desigual influencia en nuestro *doceañismo*, no solo desde el punto de vista de su contrapuesta estructura constitucional en cuanto a la definición del juego de los poderes del Estado, sino, simultáneamente, del pensamiento e ideas políticas que los sustentaban respectivamente.

Insistiendo en criterios ya adelantados en estudios anteriores, el autor incide en cómo, por debajo del envoltorio de un discurso de «historicismo nacionalista» muy condicionado por la realidad de la Guerra de Independencia, en puridad y de manera muy marcada en el campo de la *forma de gobierno*, sería el segundo modelo citado el que acabaría primando en nuestros constituyentes de 1812. Su resultante sería una Monarquía «...democrática con un sistema de gobierno asambleario o convencional», como ya la había caracterizado años antes el propio autor, que ahora se disecciona en un preciso análisis en torno a la ubicación del Rey en el sistema gaditano, desgranando: las consecuencias del principio de *soberanía nacional*, su exclusión de la reforma constitucional, su débil participación en la función legislativa en base al veto regio sólo «suspensivo» sobre las leyes y repercusión de la dualidad de actos legislativos que comportaba la particular figura de los *Decretos de Cortes*,... Una estructura constitucional que tendía a colocar la *función de gobierno* o de «dirección de la política», el *indirizzo* político, en las refun-

dadas Cortes, en la que participaría el Rey sólo en una posición muy subordinada. En fin, una caracterización que apunta a la perspectiva de un primado expansivo de las Cortes, con un Monarca más cercano a la posición de ejecutor pasivo que no a la de titular efectivo de la función directriz de gobierno. Y que aproxima el sistema gaditano a su homologación con el juicio que a Jellinek le merecía la Constitución francesa del 91 como una «república con un jefe hereditario».

Esa caracterización del autor tiene la virtud de sentar las bases para una reflexión sobre los factores de inviabilidad del sistema *doceañista* desde su origen, y justifica la corrección de esa, sólo aparentemente, contradictoria etiqueta de Monarquía *asamblearia*: la imposible combinación en las circunstancias de la época del principio monárquico, —con el prestigio tradicional de su autoridad, ubicado en el inmediatamente previo horizonte absolutista y ligado a los poderosos intereses de la sociedad estamental—, con los designios de un a modo de gobierno de Convención que, sin precedentes en nuestra historia nacional, no tenía más referentes que una experiencia francesa truncada que al haber desembocado en la dictadura del Comité de Salud Pública y la política del Terror, era de imposible evocación.

Pero el autor no se ciñe al exclusivo momento de la configuración del sistema constitucional de 1812 en las Cortes de Cádiz, sino que es central en su estudio el análisis de su tortuoso desenvolvimiento y rodaje, indagando en los factores que pueden explicar su definitivo abandono, por conciencia sobre su inviabilidad, en la «transacción» *progresista* de 1837, cuando en la Constitución de este año se sentaron

las perdurables bases de una *forma de gobierno* bien distinta, llamada a tener en nuestro país y en sus claves esenciales una duración casi centenaria, la Monarquía *constitucional* dual de corte *liberal-doctrinario*.

Se conjugan al respecto varios niveles de análisis y su entrecruzamiento: por un lado, las fases de nuestra abigarrada historia política a raíz del retorno de Fernando VII, el golpe de Estado de 1814 y la primera Restauración, la experiencia del *Trienio Liberal* —verdadero banco de pruebas del sistema *doceañista*—, la «década ominosa» y al fallecimiento de aquél, los problemas planteados por la transición al Estado Liberal en el marco de la primera guerra *carlista*; por otro, los nuevos vientos del pensamiento constitucional de la Europa postnapoleónica, —la «anglofilia» del liberalismo postrevolucionario, el predicamento del utilitarismo de J. Bentham y de los postulados de B. Constant, los planteamientos del *juste milieu* de los liberales *doctrinarios*, que van ganando influencia frente al viejo y desacreditado iusnaturalismo racionalista y abstracto de la época revolucionaria—, con su impregnación en las nuevas *formas de gobierno* del régimen de la *Carta* y de la *Monarquía de Julio* en Francia. Nuevos horizontes en las ideas políticas y en las estructuras constitucionales que irán poniendo en valor de referencia el pretendido modelo británico, con su reforma evolutiva sin rupturas revolucionarias, la «parlamentarización» de la Monarquía, la búsqueda de equilibrios políticos en una imaginada y deseada Monarquía *constitucional* de base «dualista». Un análisis que busca calibrar, sobre todo a través de la publicística de nuestro liberalismo en sus sucesivos exilios, las influencias

que, tanto las amargas experiencias interiores, —caso de las «lecciones» del *Trienio Liberal* y de su desenlace en la intervención de los *Cien Mil Hijos de San Luis*—, como el conocimiento y contacto con las nuevas ideas y estructuras constitucionales en los provisionales y obligados refugios de Francia e Inglaterra, fueron teniendo en nuestros políticos liberales en orden a ir abandonando paulatina, pero irreversiblemente, los parámetros del *doceañismo*.

Así, y desde los primeros posicionamientos «anglófilos» de Blanco White en *El Español*, van desfilando ante el lector la *Representación* de Flórez Estrada, el *Acta Constitucional* de 1819, el «Plan Beitia» (así llamado por C. Morange), las ambivalentes y de transición *Lecciones de Derecho Público Constitucional* de R. Salas en el Trienio, los postulados de los afrancesados y *El Censor* en esta misma época, o la evolución de posiciones de destacados *doceañistas* como el Conde de Toreno en su *Historia del levantamiento. Guerra y Revolución en España* (1827-37), que van mostrando la penetración de las nuevas ideas en nuestro liberalismo sobre la conveniencia de introducción del bicameralismo, de fórmulas de parlamentarismo «dualista», de coparticipación regia plena en el proceso político, por ejemplo, a través de la sanción *libre*, o de asimilación de las, por otra parte complejas y contradictorias, ideas sobre el poder *moderador* de la Corona; acompañadas, eso sí, de la perseverante, aunque en claro retroceso, defensa del sistema *doceañista* en publicaciones como *El Español Constitucional* (Londres 1814-20) de Fernández Sardino.

Y no solo recepción de ideas. En el libro merece especial atención las pá-

ginas dedicadas a la experiencia de nuestro *Trienio Liberal*, como único periodo que puso a prueba la viabilidad del sistema *doceañista*. Donde el adverso contexto europeo, la nula voluntad transaccional de Fernando VII y la pronta apelación a soluciones de fuerza, —alzamiento de la Guardia Real en el verano de 1822—, impidieron no solo la estabilización de aquél sino vislumbrar sus potencialidades de evolución y desarrollo político, entre unos *exaltados* empeñados en las veleidades de *gobierno de Asamblea* y unos liberales *moderados* atrapados entre la interpretación de aquél en clave «presidencialista» o su necesario abandono para acercarse a parámetros de régimen de *Carta* o de Monarquía *constitucional* «dual». Como igualmente es bien a destacar el estudio de la época del Estatuto Real y de la «transacción» *progresista* inmersa en la Constitución de 1837, donde se acabaría materializando el abandono definitivo de la Monarquía *doceañista* y la asunción por nuestro liberalismo, tanto *moderado* como *progresista*, de los fundamentos de una Monarquía *constitucional* de base dual, de pretendido equilibrio transaccional Corona-Cortes, acompañado de la adopción de incipientes formas de régimen *parlamentario* como sería el llamado de las «dos confianzas».

La presente obra, por sus implícitas propuestas metodológicas para la Historia constitucional, y preparada por sólidos y específicos estudios previos, nos brinda una esclarecedora visión sobre la Monarquía de 1812, combinando las influencias doctrinales y

caracterización de su *forma de gobierno* en el momento fundacional de las Cortes de Cádiz, con los factores que en su rodaje mostraron su inviabilidad, tanto por la asimilación de los nuevos parámetros del pensamiento y estructuras constitucionales en la Europa de la Restauración por nuestro liberalismo en el exilio, como simultáneamente por las «amargas lecciones» aprendidas por éste en el traumático y frustrante devenir del reinado de Fernando VII. Un estudio, en fin, que nos sugiere la reflexión de cómo la Constitución de Cádiz sentó bases fundacionales e irreversibles de nuestro Estado constitucional, —la soberanía *nacional*, la división de poderes, la inserción neurálgica de las Cortes en el proceso político,...—, pero cuya concreta *forma de gobierno* no tuvo fortuna, quedó como un *ensayo* típico de las primeras fases rupturistas de la revolución liberal. Sólo en la fase de «consolidación transaccional» de nuestra revolución, en los primeros pasos del reinado de Isabel II, se alcanzaría la buscada estabilidad de la *forma de gobierno*, con unas bases de legalidad común admitidas tanto por la Corona como por las dos grandes alas de nuestra familia liberal, y ahora más convergentes con las nuevas concepciones en la Europa constitucional; pero para ello habría que abandonar enteramente la fórmula *doceañista*, edificando aquella sobre un modelo radicalmente distinto, la referida Monarquía *constitucional* dual, de corte *liberal doctrinario*, en el horizonte de la política liberal conservadora del *justo medio*.

Juan Ignacio Marcuello Benedicto

Universidad Autónoma de Madrid
juanignacio.marcuello@uam.es